

LOS CAMINOS POLITICOS DE VENEZUELA

Arturo Sosa A.

La dificultades de todo tipo que sentimos los venezolanos en los últimos tiempos nos han hecho tomar conciencia de las grandes transformaciones que hemos experimentado como conjunto social en los últimos 27 años. Las dimensiones económicas de la Venezuela de hoy han dejado muy atrás las condiciones de 1958. Las aspiraciones de los distintos grupos sociales también han cambiado significativamente. El manejo político de las nuevas condiciones sociales y económicas del país exige mecanismos adecuados a esa realidad. Las formas de conciliar los distintos intereses que dieron origen al actual sistema político democrático también han sido superados. Hoy existen nuevos factores de poder y nuevas articulaciones de intereses sociales. Nos proponemos examinar los cambios directamente relacionados con el sistema político experimentados durante estos años de ejercicio democrático y exponer los caminos por los que se busca el establecimiento de nuevas relaciones de poder y de mecanismos de toma de decisión sobre el conjunto de la sociedad.

EXPERIMENTAMOS LA DEMOCRACIA

Posiblemente el mayor cambio social experimentado por la sociedad venezolana es el ejercicio concreto de un sistema político democrático. Es prácticamente imposible medir con precisión los alcances colectivos, grupales y personales de esta experiencia. Pero si no partimos del esfuerzo de comprender lo que ha sucedido en el interior de las relaciones sociales a causa de esta experiencia democrática difícilmente podremos encontrar el rumbo del futuro.

La **democracia** aparece en el lenguaje político venezolano desde la época de la guerra de emancipación. Como no tenía ningún referente en la experiencia histórico-política del pueblo venezolano, cualquier caudillo, aspirante a gobernante, agrupación política o régimen de gobierno podía utilizar impunemente el adjetivo "democrático".

Por la ausencia de una experiencia histórica de democracia se hacía casi imposible la discusión y participación consciente en los proyectos de instaurar la democracia surgidos a partir de la muerte de Juan Vicente Gómez. Democracia fue una palabra utilizada por los más variados grupos políticos venezolanos para resumir las aspiraciones de modernización de Venezuela. López Contreras, Medina Angarita, Delgado Chalbaud y Pérez Jiménez se sintieron iniciadores de la democracia con tanta certeza como Betancourt, Leoni, Caldera, C.A. Pérez, Herrera Campins y Lusinchi. A nombre de la democracia se han lanzado en Venezuela toda clase de proposiciones políticas.

Sin embargo, estos 27 años de sistema democrático partidista se han convertido en la referencia histórica concreta de las propuestas democráticas para muchos millones de venezolanos. Como toda concreción de una utopía, la democracia que experimentamos en algo se parece a ella, en algunos aspectos realiza las aspiraciones que encarnaba idealmente, y en mucho se distancia, deja mucho que desear e, incluso, desfigura y frustra el ideal con el que se había soñado. En todo caso, cuando hoy se habla de democracia, el pueblo venezolano entiende por ella lo que ha experimentado en estos años. Lo que ha habido de realiza-

ción del ideal democrático antes sólo proclamado, ahora forma parte de la conducta habitual del pueblo. Las frustraciones de ese ideal también han pasado a formar parte de la percepción común de nuestras posibilidades futuras como sociedad participativa e igualitaria.

Esto que hemos vivido, que necesitamos conocer mucho mejor, nuestro "sistema democrático-partidista" es el punto de partida de cualquier camino que quiera tomar la política venezolana.

ACTORES Y PACTOS EN NUESTRA DEMOCRACIA

La característica fundacional de la democracia que hemos experimentado los venezolanos ha sido su estructura de **pacto** como medio ordinario para conseguir la conciliación de intereses sociales en la toma de decisiones y en la puesta en práctica de esas decisiones. La eficacia de esos pactos para el manejo de la política democrática venezolana se ha basado en la existencia de élites poco numerosas representativas de importantes intereses sociales, por una parte, de partidos políticos populistas, es decir, que siendo muy numerosos (si se toma en cuenta su caudal electoral e, incluso, su militancia) son manejados por un muy reducido grupo de líderes en representación de esa masa y sus aspiraciones, por la otra, y un aparato estatal con gran autonomía económica (proveniente de la renta petrolera) que ha sido factor fundamental en el surgimiento de la modernidad en el país, al lado de una sociedad civil muy desarticulada (ver el diagrama del sistema político venezolano en SIC No. 452, febrero de 1983, p. 75).

En estos 27 años se han producido enormes cambios en los actores sociales que han sido sujetos de la política democrática. Por lo cual, los pactos para lograr la conciliación de intereses cambiantes también deben sufrir modificaciones. El pacto democrático de 1958 tuvo su pilar fundamental en el acuerdo interpartidista conocido como el Pacto de Punto Fijo y su vinculación con una élite económica interesada en la industrialización del país mediante la "sustitución de importaciones", con el apoyo

directo de la corriente institucionalista de las Fuerzas Armadas Nacionales y de la Iglesia Católica.

El rol que hoy juegan estos dos últimos actores es radicalmente diferente. La Iglesia Católica y el Estado venezolano han llegado a un *Modus Vivendi* en el cual se ofrecen mutuo apoyo y se respetan las diferentes áreas de actuación. Ninguno de los dos se siente amenazado por el otro; por tanto, podría decirse que "no hace falta" que la institución eclesiástica figure como actor de los pactos políticos y basta con que funcione como intermediario en la específica dimensión religiosa entre la sociedad civil y la cúpula decisoria del sistema político. Las Fuerzas Armadas Nacionales, por su parte, han dejado de concebirse a sí mismas como "sujeto político" líder del proceso de modernización y han asumido su papel institucional en las relaciones democráticas. Tal transformación ha sido posible sobre la base de un acuerdo entre los actores sociales por el que reconocen a las Fuerzas Armadas como un estamento con sus prerrogativas muy bien delimitadas y sujeto activo de las decisiones políticas a través de su inserción normal en la estructura del Estado. De esta manera las Fuerzas Armadas en Venezuela han pasado a formar parte del aparato estatal, conservando su fisonomía propia como actor social y eventual actor político.

Los partidos políticos, aunque conserven los mismos nombres, símbolos y hasta líderes y dirigentes, han padecido fuertes cambios. Acción Democrática y COPEI han tenido que resolver todos los problemas que significó el ejercicio del gobierno junto con el mantenimiento de una fisonomía propia y una dinámica de crecimiento como partidos de masas. Han tenido que escoger aquellos elementos de su utopía posibles de realizar y, sobre todo, justificar las desfiguraciones y frustraciones del ideal democrático que su experiencia concreta ha significado, sin dejar de presentar un proyecto para el futuro. Los partidos de la izquierda socialista pasaron, a su vez, por la experiencia de la derrota política y militar del camino de la subversión armada para la conquista de la hegemonía política y las dificultades de reubicarse dentro del proceso político-social venezolano para representar una alternativa real a la experiencia vigente.

Los sectores empresariales han sufrido todavía mayores transformaciones. El inmenso crecimiento económico del país en estos años ha exigido la diversificación de las funciones económicas,

por ende, el surgimiento de variados intereses y se ha hecho bastante más compleja la interrelación entre las diferentes actividades económicas y el logro de los mismos objetivos. En la Venezuela de hoy se realizan todas las actividades económicas propias de una economía capitalista. Por eso mismo, han surgido nuevas formas de asociación empresarial para la defensa de los nuevos intereses. En una primera fase bastaba la asociación gremial entre los agentes de las distintas actividades económicas y su fusión a través de FEDECAMARAS como organismo representativo de los intereses comunes del conjunto del sector privado de la economía nacional. Con el proceso de crecimiento surgen, además, los llamados GRUPOS ECONOMICOS como alternativa asociativa. Ya no es una asociación gremial sino la integración organizativa empresarial. Los Grupos Económicos son grandes organizaciones constituidas por numerosas empresas que realizan actividades en los más variados campos de la economía, integradas bajo una misma cabeza planificadora y decisora de las acciones del conjunto de la organización y de cada una de ellas. El sector empresarial privado significa, entonces, distintos actores políticos a la hora de establecer pactos políticos e intentar el equilibrio en la correlación de fuerzas sociales.

También el Estado ha sufrido transformaciones importantes. La más significativa es el crecimiento de su estructura ejecutiva, especialmente la llamada "administración descentralizada" en la que se concentra la inmensa actividad económica que realiza directamente el Estado. El proceso democrático ha subrayado el peso del Ejecutivo en la actividad estatal, y no ha logrado un funcionamiento equilibrador del poder legislativo ni judicial.

En contraste con 1958 hoy existe una amplia organización sindical en el país, nacida del esfuerzo de los partidos políticos de insertarse en el mundo obrero. Por la misma acción e intereses de los partidos la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) ha hegemónizado la "representación" obrera-sindical en el sistema político a pesar de la existencia de otras centrales obreras (CUTV, CGT, CODESA...) y de vastos sectores de trabajadores no vinculados a ella.

De esta manera, cualquier alternativa de reacomodo del sistema político democrático venezolano para adecuarlo a las nuevas situaciones tiene que contar con la CTV, los Grupos Económicos,

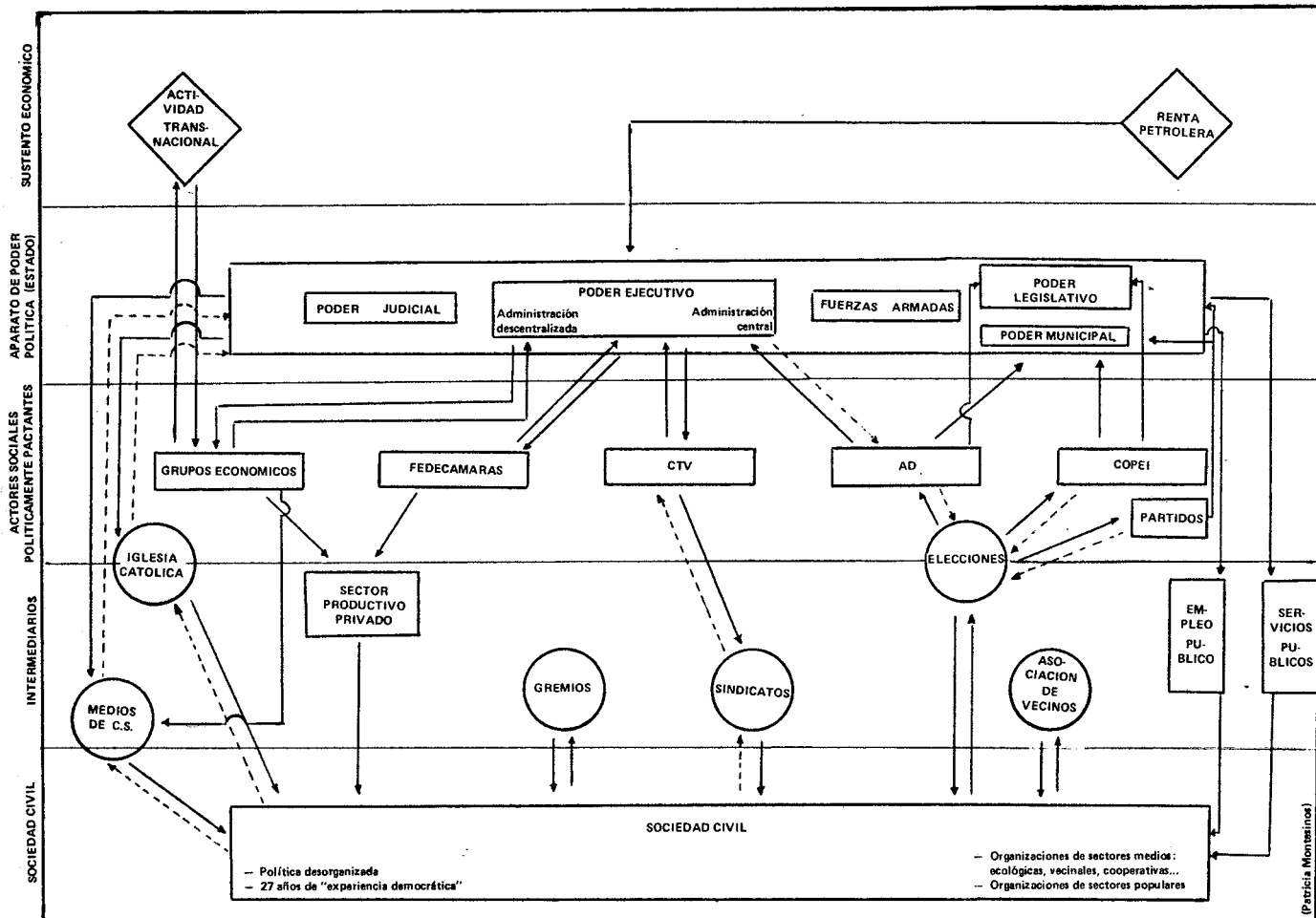
FEDECAMARAS y los Partidos políticos. La distinta percepción de la fuerza de estos y de las posibilidades de desarrollo democrático marcan la diferencia entre las diferentes estrategias puestas sobre el tapete. Sobre esta base examinemos la propuesta del **Pacto Social**, del **Acuerdo Nacional** y de la **Gerencia política para la producción**.

UN AÑO DEL PACTO SOCIAL

La campaña presidencial de Jaime Lusinchi lanzó a la calle la estrategia de Acción Democrática para el futuro inmediato: ampliar la democracia política conquistando la democracia social para lo cual el instrumento fundamental es el **pacto social**. El desgaste por haber sido gobierno durante quince años, el agotamiento de la discusión ideológica interna, la muerte del fundador y la presencia de un sindicalista en la Secretaría General, entre otros factores, exigían del partido una proposición política que significará un avance a lo que se había logrado, una nueva bandera por la cual movilizar a la militancia y a la sociedad. De allí surge la propuesta de "ahora la democracia social" con la que se quiere dar ese paso novedoso al mismo tiempo que se vincula con lo que ha sido hasta el momento la lucha del partido. La democracia social se presenta como una nueva fase en el desarrollo del programa de A.D. para Venezuela que comenzó con la lucha por la democracia política.

El lanzamiento de esa proposición supone una nueva estrategia. La democracia política se hizo posible a partir de un pacto interpartidista como pivote de un sistema de alianzas con los demás actores sociales decisivos en la correlación de fuerzas. De esta manera el Pacto de Punto Fijo en 1958 permite la creación de una red de alianzas para el manejo político de la sociedad venezolana que logra el establecimiento de lo que conocemos como "experiencia democrática". Esta nueva fase exige una estrategia en la que el pivote fundamental no es el acuerdo entre los partidos, sino el pacto entre las más activas fuerzas sociales (empresariado y trabajadores) y el Estado, manejado por el partido ganador de las elecciones. La base de esta estrategia es que la democracia política ya puede funcionar sin el tipo de acuerdo partidista que significó el Pacto de Punto Fijo porque goza de fuerte arraigo en la población y demuestra su legitimidad política en las elecciones quinquenales. Además, porque no existe ninguna alternativa con fuerza social real al actual sistema de democracia política venezolano.

PACTO SOCIAL



lano.

El **Pacto Social**, por supuesto, tiene nombre y apellido. En el momento de lanzar la proposición Acción Democrática tiene la certeza de que barre en las elecciones, con lo cual asume legítimamente el control del Estado venezolano; no sólo del Ejecutivo, sino también del Congreso y de los Concejos Municipales. De esta manera el Estado puede ser quien ponga en práctica la estrategia política de A.D.: buscar la concertación entre el capital privado (Grupos Económicos y FEDECAMARAS) a los cuales hay que apoyar para aumentar la producción y la productividad nacional, y los trabajadores, exclusivamente representados por la CTV, a su vez controlada también por A.D.

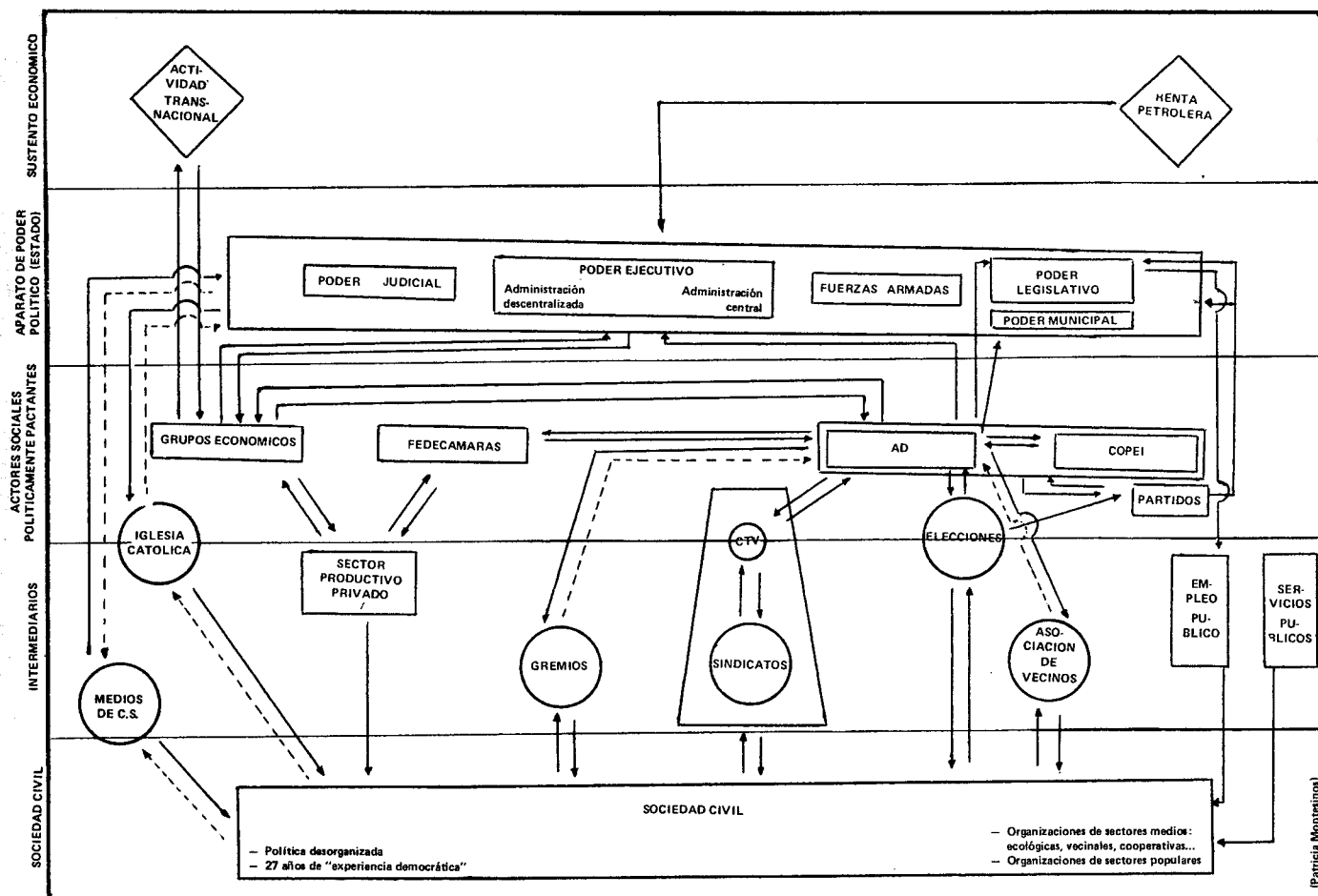
La democracia social es, fundamentalmente, una propuesta de redistribución de la riqueza nacional, es decir, de igualación de los niveles de vida tanto por la vía de los ingresos como de la participación en servicios sociales. En una situación económica como en la que ha entrado el país ya no basta redistribuir los sobrantes de la renta petrolera;

se hace necesario un nuevo esquema de participación social en los beneficios de la actividad económica pública y privada. De allí la necesidad de la participación del sector privado de la economía en el pacto. Además, distribuir la riqueza implica que primero hay que crearla y que en la estructura socioeconómica en la que nos movemos esa función es normalmente de la actividad económica privada. De esta manera el Pacto Social es un paso coherente en el modelo de desarrollo ya iniciado en el que la producción de riqueza debe hacerla el empresariado, con el apoyo del Estado y, también regulado por éste para la distribución equitativa de sus beneficios.

Avalado por el contundente triunfo electoral el gobierno de Jaime Lusinchi se propuso la puesta en marcha acelerada de la estrategia descrita. A un año de distancia empieza a hablarse de la defunción del Pacto Social, firmada por uno de sus autores, el ex-Ministro de CORDIPLAN y ex-jefe de la comisión del programa de gobierno de Lusinchi. Es evidente que el balance del año ha sido muy favorable al sector empresarial

privado, quizá porque el gobierno tiene que garantizar antes que nada la reactivación económica y no encuentra mejor manera de hacerlo que "ganarse la confianza" de quienes pueden invertir en el país. En todo caso, las razones por las que se declara fracasado el primer intento del Pacto Social no invalidan la estrategia ni son las mismas para los que la han proclamado. Para Luis Matos Azócar hay dos tipos de razones, las que vienen del haber experimentado los límites de lograr avances en este sentido por la vía del acuerdo racional y negociado (en el que todas las partes ceden algo para beneficiarse en conjunto) al verse frente a la "miopía" del sector privado que obliga a la confrontación y, quizá, al conflicto social; y las razones que provienen de su esfuerzo por volver a hacer de A.D. un partido en el que se discuten ideas y capaz de ser sujeto consciente de la nueva estrategia. Matos Azócar, en su discurso del día de la Juventud en Maracay, entre otras cosas, denunció: "en Venezuela, en todos los partidos, se han creado paredones de fusilamiento intelectual con una especie

ACUERDO NACIONAL



de ley de fuga: no hay escenarios para discutir ideas dentro y luego se les aniquila si las expresan en público". Para la oposición copeyana, en cambio, la decretada defunción del Pacto Social es otro ariete a utilizar para abrir la puerta del "acuerdo nacional".

Gonzalo Barrios, Presidente de A.D., lo expresó en su peculiar estilo de declarar: "Yo creo que el Pacto Social, más que un programa o un plan de acción, tiene que ser o es una tendencia social, tendencia que a pesar de algunas apariencias no deja de estar presente en la vida venezolana" (El Nacional, 14-1-1985), p. D-2). En otras palabras, se está en una fase de tanteo de una estrategia novedosa y difícil de poner en práctica dentro de los marcos habituales de la democracia venezolana.

La realización del Pacto Social es, en fin de cuentas, un problema de poder político. De cómo se establezca la correlación entre los actores sociales dependerá el contenido específico de lo que se llama Pacto Social. Y ésa es la causa de que produzca tantas tensiones. Para los Grupos Económicos y Fedecámaras se trata de mejorar su posición

relativa en las decisiones económicas del Estado y asegurar una mayor participación en los recursos cada vez más escasos (relativamente). Para las corrientes dentro de Acción Democrática que quieren convertir al partido en una verdadera organización socialdemócrata (en su práctica política y en su propuesta programática) el objetivo es mantenerse en el ejercicio legítimo del gobierno y hacer del Estado el principal instrumento de aplicación de su estrategia socialdemócrata. Para COPEI y los demás partidos de oposición el esfuerzo consiste en no dejarse desplazar del centro de las alianzas que llevan a las decisiones cotidianas. Por eso tienen que hacer todo lo posible por evitar la sensación de hegemonía total de A.D. y conjurar la tentación de convertir el Pacto Social en un esquema corporativista amparado en un partido único para el manejo de las decisiones políticas del Estado venezolano.

MEJOR UN ACUERDO NACIONAL

Desde la oposición COPEI ha lanzado la propuesta del Acuerdo Nacional como alternativa a la del Pacto Social. Según esta propuesta la democracia ve-

nezolana no puede funcionar sino sobre la base de un acuerdo primario entre Acción Democrática y COPEI, con una participación negociada de los otros partidos políticos, desde el cual se pueden establecer las alianzas con el sector privado para el manejo del Estado en las actuales condiciones de la economía nacional. La falta de unidad (fruto del acuerdo) entre los partidos debilita el ejercicio democrático.

Para COPEI, a pesar de las transformaciones señaladas en la sociedad venezolana y en las correlaciones entre los actores políticos, no ha llegado todavía la hora de sustituir el pacto interpartidista como clave del funcionamiento del sistema político y como modo de conducir la acción del Estado. Más aún, sólo esa alianza entre los dos grandes partidos puede en el momento actual asegurar la participación de las masas en la distribución de los recursos sociales y evitar que sólo una minoría de la población se apodere de ellos. También la existencia de un frente común político-partidista es la mejor forma de conseguir una concertación nacional (más allá de los partidos) en los grandes temas de in-

terés colectivo como la política petrolera (interna y externa), las relaciones exteriores, los problemas fronterizos, los términos de acuerdo de refinanciamiento de la deuda pública y privada, la integración de las más importantes instituciones del Estado y de la sociedad, etc.

La propuesta del acuerdo nacional logra, posiblemente, un mayor equilibrio entre las organizaciones políticas, moderar las presiones de Fedecámaras y controlar el movimiento sindical. Sin embargo, hace un poco más difícil la acción estatal (porque hay que "repartir" la presencia de cada fuerza política...) y, sobre todo, encuentra pocas defensas a la presión directa de los poderosos Grupos Económicos sobre las decisiones del Estado y de cada uno de los partidos.

GERENCIA POLITICA PARA LA REACTIVACION

En el aire (más que sobre el tapete de la abierta discusión política) se mueve otra propuesta alternativa a las dos anteriores. Es una propuesta que tiene muy en cuenta el nuevo papel del sector empresarial privado en la correlación de fuerzas sociales y encuentra su "ocasión" en la difícil situación económica por la que atraviesa la economía venezolana, que está obligando a importantes reajustes en el modelo de desarrollo. Una alternativa en sintonía con el renacer de las corrientes neoliberales en el pensamiento económico occidental (cf. SIC 472, febrero de 1985, pp. 66-71) que ponen su acento en el papel de los productores (oferta) en la reactivación del mercado y el estímulo de las inversiones.

En el caso venezolano estas ideas se vinculan con la necesidad de frenar el desarrollo (estimado ya como excesivo) del aparato estatal y hacer que su acción sea eficiente. En un momento de crisis hace falta un Estado-gerente, manejado gerencialmente. La implicación lógica de este razonamiento lleva a concluir que quienes mejor pueden manejar el Estado son los gerentes. Obviamente que los tales gerentes se encuentran en el sector privado.

Quienes promueven esta idea están convencidos de que el sistema democrático-partidista venezolano supone una estructura de relaciones sociales y unos mecanismos de negociación política muy costosos. Socialmente costosos, porque exige la conciliación de variados intereses mediante un complejo proceso de negociaciones. generalmente percibimos como muy lentos (perdedera de



tiempo) por los "gerentes". Económicamente costosos porque hace falta mantener las inmensas maquinarias partidistas, porque gran parte del exceso de burocracia estatal se debe a razones políticas y porque hay que destinar una buena tajada de los recursos fiscales a satisfacer, directa o indirectamente, necesidades sociales (parezcan o no prioritarias a los criterios gerenciales), pues de lo contrario no se ganan las elecciones ni se mantiene la adhesión de las masas al sistema. Cuando los recursos petroleros eran tan abundantes que se podían satisfacer las aspiraciones económicas de las élites económicas y, además, aumentar constantemente el gasto social, no había problemas graves de decisión. Ahora, en cambio, las decisiones de política económica reparten recursos menores a los necesarios para satisfacer todas las aspiraciones y son, por tanto, decisiones de poder.

La justificación de un gobierno gerencial que ponga entre paréntesis a los partidos políticos y su red de comunicaciones con la sociedad y sus élites es, evidentemente, la "situación de emergencia que vive el país" que requiere una sola cabeza que decida. El acento de la propuesta se pone en los objetivos de la política económica y no se explicitan los mecanismos políticos a través de los cuales se mantendrá el "orden social" y se canalizarán las demandas de la sociedad civil (función que cumplen los partidos en el esquema democrático); lo que lleva a la sospecha de que se piensa en recursos represivos (¿"democracia



restringida'?) y se aspira a contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad.

La manera como se puede llegar a esta situación varía desde una forma "blanda" de convencer a la dirigencia democrática mediante presiones de alto nivel de aceptar la emergencia nacional y dejar el puesto a los gerentes, hasta su aparición como fórmula salvadora de una situación de caos social incontrolado por las organizaciones y modos propios del sistema actual: Igualmente la fachada de un gobierno que encarne esta propuesta puede presentar diferentes formas: desde un conjunto de conocidas personalidades que avalen con su presencia la gravedad de la situación y le den un tinte más o menos civilizado, una composición netamente tecnocrática, o la necesidad extrema de la presencia física de los militares.

Esta propuesta tampoco aclara cuánto tiempo necesita para "solucionar" la emergencia, ni qué se entiende por un régimen político democrático en esas condiciones, ni cuál es el papel de los demás grupos sociales en la construcción del futuro...

ENCRUCIJADA DE CAMINOS

Tanto el momento actual como las transformaciones que se han dado bajo el sistema democrático-partidista de los últimos veintisiete años abren nuevos caminos a la política venezolana. Esos caminos tienen encrucijadas que conducen en direcciones divergentes. Las encrucijadas y curvas a veces son imperceptibles en el momento y sólo se toma conciencia cuando se ha ido demasiado lejos. En nuestro caso, además, son caminos para los cuales no hay mapas previos confiables. Son caminos que se van haciendo al andar. Pero ese andar no tiene que ser a ciegas. Podemos hacer un fecundo ejercicio colectivo de vislumbrar el camino que conduce a la realización de la democracia que hemos empezado a experimentar como pueblos y que evite encontrarnos sorpresivamente donde no queremos estar como sociedad.

No perder terreno en la experiencia democrática vivida por la nación venezolana en este tiempo significa ampliar la información y la discusión sobre las rutas que se abren y dar los pasos que impulse el sentir de la base de la sociedad sin delegar esa responsabilidad en los que se sienten los conductores del conjunto y pueden dejarse llevar por sus propios intereses en la elección del camino.